



Servicios públicos universales: El poder de desmercantilizar la supervivencia

Jason Hickel

Una de las principales conclusiones de la investigación sobre decrecimiento y mitigación del cambio climático es que los servicios públicos universales son cruciales para una transición justa y eficaz.

El capitalismo se basa en mantener una escasez artificial de bienes y servicios esenciales (como la vivienda, la atención sanitaria, el transporte, etc.) a través de procesos de cercamiento y mercantilización. Sabemos que el cercamiento permite a los monopolistas subir los precios y maximizar sus beneficios (pensemos en el mercado de alquileres, el sistema de atención sanitaria de EUA o el sistema ferroviario británico). Pero también



Los servicios públicos son un bien común", reza una pancarta en la protesta del 22 de marzo en París contra los recortes, los derechos laborales y la privatización. Foto: Twitter/ @commeunbruit

En el capitalismo la gente se ve obligada a trabajar produciendo cosas innecesarias (con un mayor uso de energía, recursos y presión ecológica) para adquirir cosas realmente necesarias.

tiene otro efecto. Cuando los bienes esenciales están privatizados y son caros, la gente necesita más ingresos de los que necesitaría para acceder a ellos. Para conseguirlos se ven obligados a aumentar su trabajo en los mercados capitalistas, trabajando para producir cosas nuevas que pueden no ser necesarias (con un mayor uso de energía, recursos y presión ecológica) simplemente para acceder a cosas que claramente son necesarias, y que muy a menudo ya están ahí.

Por ejemplo, la vivienda. Si el alquiler sube, de repente hay que trabajar más para mantener el mismo techo. A nivel de toda la economía, esta dinámica significa que necesitamos más producción agregada -más crecimiento- para satisfacer las necesidades básicas. Desde la perspectiva del capital, esto garantiza un flujo constante de mano de obra para las

empresas privadas y mantiene la presión a la baja sobre los salarios para facilitar la acumulación de capital. Para el resto de nosotros significa explotación innecesaria, inseguridad y daños ecológicos. La escasez artificial también crea dependencias del crecimiento: como la supervivencia está mediada por los precios y los salarios, cuando las mejoras de la productividad y las recesiones conducen al desempleo la gente sufre la pérdida de acceso a los bienes esenciales -incluso cuando la producción de esos bienes no se ve afectada- y el crecimiento es necesario para crear nuevos puestos de trabajo y resolver la crisis social.

Sabemos por estudios empíricos que los servicios públicos son un potente impulsor de mejoras en la esperanza de vida, el bienestar y otros indicadores sociales clave. Los servicios universales también acabarían con la actual crisis del coste de la vida, al reducir directamente el coste de la vida.

Hay una forma de salir de esta trampa: desmercantilizando los bienes y servicios esenciales, podemos eliminar la escasez artificial y garantizar la abundancia pública, desvincular el bienestar humano del crecimiento y reducir las presiones expansionistas.

Este enfoque también tiene otros beneficios sociales y ecológicos directos. Por un lado, puede tener un fuerte impacto positivo en el bienestar humano. Sabemos por estudios empíricos que los servicios públicos son un potente impulsor de mejoras en la esperanza de vida, el bienestar y otros indicadores sociales clave (aquí, aquí y aquí). Los servicios universales también acabarían con la actual crisis del coste de la vida, al reducir directamente el coste de la vida.

También sabemos que los países con servicios públicos desmercantilizados o de otro modo universales pueden ofrecer mejores resultados sociales en cualquier nivel dado de PIB y uso de recursos (aquí, aquí, aquí, aquí y aquí). Los servicios universales garantizan una conversión eficiente de los recursos y la energía en resultados sociales. Además, como veremos, el control público de los sistemas de provisión facilita la rápida descarbonización de esos sectores.

Por último, junto con una segunda política clave -la garantía de empleo público-, este enfoque acabaría definitivamente con la inseguridad económica y resolvería la actual contradicción entre objetivos sociales y ecológicos. Ahora mismo es imposible dar pasos, incluso obvios, hacia la mitigación del cambio climático (como reducir la producción de combustibles fósiles u otros sectores destructivos), porque la gente de las industrias afectadas perdería el acceso a salarios, vivienda, atención sanitaria, etc. Nadie debería aceptar semejante resultado. Con servicios universales y una garantía de empleo emancipador, podemos protegernos contra cualquier inseguridad económica y garantizar una transición justa. No hay contradicción necesaria entre los objetivos ecológicos y los sociales. Ambos pueden y deben perseguirse juntos.

Por servicios universales entiendo no sólo la atención sanitaria y la educación, sino también la vivienda, el transporte, los alimentos nutritivos, la energía, el agua y las comunicaciones. En otras palabras, una desmercantilización del sector social básico: los medios de supervivencia cotidiana. Y me refiero a servicios atractivos, de alta calidad, gestionados democráticamente y adecuadamente universales, no a los sistemas de mierda de último recurso que vemos en EUA y otros países neoliberales. ¿Qué aspecto tiene esto? ¿Cómo lo conseguimos?

Atención sanitaria y educación. Esto es común: la mayoría de los países europeos tienen sistemas universales de atención sanitaria y educación, muchos de los cuales figuran entre los mejores sistemas sanitarios del mundo. El principio clave es que la atención sanitaria debe ser gratuita en el punto de uso, idealmente a través de un proveedor público, sin la intermediación de costosas aseguradoras privadas. Del mismo modo, la educación pública debería ser

gratuita desde la escuela primaria hasta la universidad. Las deudas existentes por atención sanitaria y educación deberían cancelarse.

Vivienda. Los gastos de vivienda constituyen una gran parte de los gastos domésticos. Se trata de un bien esencial, tan necesario como la atención sanitaria y la educación. Empero, la gente suele gastar entre el 30% y el 50% de su salario en alquiler (por una vivienda que a menudo es lamentablemente deficiente), y comprar una casa es en muchos lugares cada vez más inasequible para cualquiera que no sea rico. Es importante distinguir entre la propiedad de la vivienda (que está bien) y el control privado de las unidades de alquiler, que es donde surgen los problemas, sobre todo en el caso de las grandes empresas propietarias que controlan docenas o incluso miles de viviendas. Esto último representa el acaparamiento de un recurso clave fundamental para la supervivencia. No lo toleramos en el caso de la atención sanitaria, pero por alguna razón lo hacemos habitualmente cuando se trata de la vivienda.

Una intervención eficaz consistiría simplemente en limitar el número de unidades de alquiler que cualquier persona o empresa puede poseer, y exigir la venta de las propiedades sobrantes. La afluencia de viviendas al mercado haría bajar los precios, lo que haría más asequible para la gente comprar una residencia, pero también haría más asequible para los gobiernos municipales la compra de unidades, la ampliación del parque público de viviendas y la mejora de la calidad de las viviendas, que se integrarían de forma natural en el tejido de la ciudad. De este modo, las unidades públicas de alquiler podrían estar disponibles a precios asequibles, y las unidades privadas de alquiler restantes tendrían que tener tarifas lo suficientemente bajas como para competir con la opción pública. Viena y Singapur ofrecen un modelo de vivienda pública atractiva y de alta calidad que disfruta entre el 60% y el 80% de la población. Y un planteamiento de este tipo puede utilizarse para lograr rápidas mejoras de eficiencia en el sector de la vivienda, incluido el aislamiento térmico, las bombas de calefacción y los electrodomésticos eficientes, contribuyendo así a lograr una rápida descarbonización.

Transporte público. El transporte público debería ser gratuito o muy barato. Barcelona es un buen ejemplo, donde los viajes en metro y tranvía a través del brillante, limpio y eficiente sistema de la ciudad cuestan sólo un euro, y las e-bikes cuestan una fracción de eso. Pero casi 100 ciudades de todo el mundo van más allá y ofrecen transporte público gratuito. En los lugares donde la infraestructura de transporte público existente es inadecuada, debe desarrollarse hasta el punto de que la gente no necesite el coche de forma habitual. Un transporte público de calidad es fundamental para reducir la demanda de automóviles y las emisiones del transporte.

Alimentación. Nuestro sistema alimentario adolece de varios problemas. Muchas personas no pueden permitirse o acceder a alimentos nutritivos, incluso en las naciones más ricas del mundo. Los supermercados suelen estar controlados mayoritariamente por unas pocas grandes empresas, que dan prioridad a los alimentos procesados rentables, con cadenas de suministro que dependen en gran medida de los envases de plástico y del transporte de larga distancia. Este modelo es altamente intensivo en energía y monocultivos, con vastas extensiones de tierra apropiadas para la producción industrial de carne, lo que conduce a la deforestación, las emisiones, el agotamiento del suelo y la pérdida de biodiversidad.

Un programa de justicia alimentaria podría garantizar el acceso universal a alimentos nutritivos, regenerativos y vegetarianos. Los gobiernos pueden financiar el desarrollo de granjas regenerativas, así como de huertos alimentarios en zonas urbanas y suburbanas, con productos vendidos a precios asequibles a través de centros comunitarios en todos los barrios que pueden funcionar también como cafeterías que sirvan comidas vegetarianas. Se trataría de lugares cómodos y atractivos donde cualquiera podría comprar y comer, con alimentos de alta calidad que cubrieran todas las

necesidades nutricionales, a la vez que facilitarían la convivencia y el compromiso de la comunidad. Un sistema de este tipo mejoraría los resultados sanitarios y también ayudaría a reducir drásticamente el uso del suelo y el impacto ecológico del sistema alimentario.

Energía y agua. Son esenciales para la supervivencia humana. La energía y el agua deben gestionarse como servicios públicos, con un sistema de precios de dos niveles: una cuota de energía y agua debe ponerse a disposición de todos los hogares de forma gratuita, ajustada al número de residentes, suficiente para satisfacer las necesidades básicas. El uso adicional de energía y agua por encima de esta cuota puede cobrarse a una tarifa progresiva para desincentivar el exceso de producción, lo que supondría aún más beneficios para el medio ambiente. Este enfoque suele contar con un fuerte apoyo popular. El sistema público de energía puede utilizarse para reducir el uso de combustibles fósiles según un calendario basado en la ciencia y dar prioridad a una rápida transición a las energías renovables, mientras que las normas que rigen el sistema público de agua pueden utilizarse para evitar la extracción excesiva por parte de empresas privadas y garantizar un suministro estable y equitativo de agua durante las sequías.

Comunicaciones. El acceso a Internet y los datos de telefonía móvil son necesarios para la vida cotidiana y deben tratarse como servicios públicos. Los particulares y los hogares deberían disponer de un paquete básico mensual gratuito, con datos adicionales y otros servicios disponibles a precios de mercado. El proveedor público sería totalmente independiente del gobierno, con una seguridad de datos de vanguardia para impedir cualquier censura estatal. Al igual que el servicio postal no lee las cartas que entrega, una red pública de datos debería estar diseñada para proteger la privacidad.

¿Cómo pagarlos? La respuesta tradicional es que para pagar los servicios públicos se necesita primero un mayor crecimiento del PIB: aumentar la producción empresarial de cosas que no necesitamos, y luego gravar los ingresos de esa producción para financiar la producción pública de cosas que sí necesitamos. Este supuesto está tan arraigado en el imaginario público que se da por sentado. La derecha lo utiliza para afirmar que los servicios públicos nos los dan de alguna manera los ricos (los que pagan "más" impuestos, lo que a menudo ni siquiera es cierto), por lo que debemos estarles agradecidos y hacer lo que sea para que acumulen más. También es ecológicamente peligroso. Necesitamos urgentemente cosas como el transporte público y las energías renovables para cumplir nuestros objetivos climáticos. Si necesitamos más crecimiento empresarial para "pagar" estas cosas, aumenta la demanda total de energía y dificulta la descarbonización.

En realidad, no hay ninguna razón por la que la producción pública tenga que depender de la "financiación" de la

Desplegar la financiación pública simplemente desplaza el uso de esta capacidad de las corporaciones al público, donde puede utilizarse para objetivos sociales y ecológicos democráticamente ratificados, en lugar de para la acumulación de capital.

producción privada previa (como si las empresas produjeran dinero de alguna manera, cosa que por supuesto no hacen). Cualquier gobierno que tenga suficiente soberanía monetaria puede movilizar la producción pública directamente, simplemente emitiendo financiación pública para hacerlo. Como

señaló Keynes: cualquier cosa que podamos hacer realmente, en términos de capacidad productiva, podemos pagarla. Y cuando se trata de capacidad productiva, las economías de renta alta ya tienen mucha más de la que necesitan. Desplegar la financiación pública simplemente desplaza el uso de esta capacidad de las corporaciones al público, donde puede utilizarse para objetivos sociales y ecológicos democráticamente ratificados, en lugar de para la acumulación de capital.

La garantía del empleo. Este mismo enfoque puede utilizarse para financiar una garantía pública de empleo. La GE

La GE ayudaría a reorientar el trabajo hacia el valor de uso social y ecológico en lugar de servir al beneficio empresarial.

pondría fin al desempleo de forma permanente, y garantizaría que cualquiera que lo desee pueda formarse para participar en los proyectos colectivos más importantes de nuestra generación: ampliar la capacidad de las energías renovables, regenerar los ecosistemas, mejorar los servicios públicos, el trabajo de cuidados, etc.; una producción urgente, socialmente necesaria, con salarios dignos y democracia en el lugar de trabajo. La GE ayudaría a reorientar el trabajo hacia el valor de uso social y ecológico en lugar de servir al beneficio empresarial. El programa tendría que ser financiado por el gobierno, el emisor de la moneda, pero debería ser gestionado democráticamente al nivel apropiado de localidad, para determinar qué formas de producción son más necesarias para satisfacer las necesidades de la comunidad. Y, por supuesto, una renta básica debería estar disponible para cualquiera que no pueda trabajar o que, por cualquier razón, decida no hacerlo.

Esta idea resulta muy popular en las encuestas. Y el poder adicional de la garantía de empleo es que puede utilizarse para establecer normas salariales y de tiempo de trabajo (acortando la semana laboral a, por ejemplo, 32 horas) y la democracia en el lugar de trabajo en toda la economía, ya que las empresas privadas se verían presionadas a adoptar normas similares a la GE o, de lo contrario, se arriesgarían a perder personal. Porque si la gente puede optar por hacer un trabajo digno y socialmente importante en un lugar de trabajo democrático, ¿por qué aceptarían hacer un trabajo sin sentido en peores condiciones para empresas corporativas cuyo objetivo principal es sólo acumular capital? No lo harían.

El poder de los servicios públicos universales reside en que podemos mejorar el acceso de las personas a los bienes necesarios para vivir dignamente, con sistemas de provisión que requieren menos energía agregada y uso de materiales y que nos permiten acelerar la descarbonización. Estos resultados pueden mejorarse aún más garantizando una sólida gobernanza democrática de los sistemas públicos. Junto con la garantía de empleo, la inseguridad económica queda abolida de forma permanente -cumpliendo un objetivo que el crecimiento por sí solo nunca ha podido alcanzar- y el bienestar humano queda desvinculado de la exigencia de una producción agregada cada vez mayor. Esto cambiaría el panorama político, liberándonos para emprender las acciones climáticas necesarias sin ningún riesgo para el empleo y los medios de subsistencia, mejorando al mismo tiempo los resultados sociales, reduciendo la desigualdad y facilitando un cambio hacia una economía más justa y ecológica.

Estas políticas deberían ser las principales reivindicaciones de un movimiento unido por el clima y el trabajo. Servicios universales, garantía de empleo, salarios dignos, una semana laboral más corta... son intervenciones populares que podrían sentar las bases de un apoyo político masivo. En cuanto al movimiento obrero, tenemos que dejar de fingir que el crecimiento capitalista acabará por arte de magia con el desempleo, garantizará salarios dignos y traerá la democracia al lugar de trabajo -cosa que nunca hace- y, en su lugar, luchar para lograr estos objetivos directamente. Y para el movimiento por el clima, al que a menudo se acusa de ignorar las condiciones materiales de las comunidades de la clase trabajadora, este enfoque aborda las necesidades básicas reales y da pie a alianzas con formaciones de la clase trabajadora. Este es el movimiento político que necesitamos.

Vínculos relacionados:

- La Alianza Global Jus Semper
- [Monthly Review Online](#)
- Jason Hickel: [El Doble Objetivo del Ecosocialismo Democrático](#)
- Jason Hickel: [El Decrecimiento es una Cuestión de Justicia Global](#)
- Jason Hickel: [Con Respecto a la Tecnología y el Decrecimiento](#)
- Jason Hickel, Aljoša Slameršak: [Los Actuales Escenarios de Mitigación del Cambio Climático Perpetúan las Desigualdades Coloniales](#)
- Jason Hickel y Dylan Sullivan: [Capitalismo, Pobreza Global y la Defensa del Socialismo Democrático](#)
- Álvaro de Regil Castilla: [La Insoportable Falta de Conciencia de Nuestra Crisis Ecológica Existencial](#)
- Álvaro de Regil Castilla: [Transitando a Geocracia Paradigma de la Gente y el Planeta y No el Mercado — Primeros Pasos](#)
- Álvaro de Regil Castilla: [Los Delirios Fraudulentos del Capitalismo Verde](#)
- Álvaro de Regil Castilla: [Mercadocracia y el Secuestro de la Gente y el Planeta](#)
- Jorge Pinto: [¿Es el Decrecimiento el Futuro?](#)
- Alejandro Pedregal y Juan Bordera: [Hacia un Decrecimiento Ecosocialista](#)
- Jonathan Barth y Michael Jacobs: [Prosperidad Sostenible en un Futuro Incierto: Una agenda compartida entre el crecimiento verde y el decrecimiento](#)
- Milena Büchs y Max Koch: [Desafíos para la transición hacia el decrecimiento: El debate sobre el bienestar](#)



❖ **Acerca de Jus Semper:** La Alianza Global Jus Semper aspira a contribuir a alcanzar un etos sostenible de justicia social en el mundo, donde todas las comunidades vivan en ámbitos verdaderamente democráticos que brinden el pleno disfrute de los derechos humanos y de normas de vida sostenibles conforme a la dignidad humana. Para ello, coadyuva a la liberalización de las instituciones democráticas de la sociedad que han sido secuestradas por los dueños del mercado. Con ese propósito, se dedica a la investigación y análisis para provocar la toma de conciencia y el pensamiento crítico que generen las ideas para la visión transformadora que dé forma al paradigma verdaderamente democrático y sostenible de la Gente y el Planeta y NO del mercado.

❖ **Acerca del autor: Jason Hickel** es antropólogo económico, escritor y miembro de la Royal Society of Arts. Es catedrático del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor visitante del Instituto Internacional de Desigualdades de la London School of Economics y catedrático de Justicia Global y Medio Ambiente de la Universidad de Oslo. Es editor asociado de la revista World Development y forma parte de la Mesa Redonda sobre Clima y Macroeconomía de la Academia Nacional de Ciencias de EUA, del consejo asesor del Nuevo Trato Verde para Europa, de la Comisión Rodney sobre Reparaciones y Justicia Redistributiva y de la Comisión Lancet sobre Salud Sostenible.



❖ **Acerca de este trabajo:** “Servicios públicos universales: El poder de desmercantilizar la supervivencia” fue publicado originalmente en inglés por Monthly Review Online en abril de 2023. Este breviarío ha sido publicado bajo Creative Commons, CC-BY-NC-ND 4.0. Se puede reproducir el material para uso no comercial, acreditando al autor y proporcionando un enlace al editor original.

❖ **Cite este trabajo como:** Jason Hickel — Servicios públicos universales: El poder de desmercantilizar la supervivencia – La Alianza Global Jus Semper, julio de 2024.

❖ **Etiquetas:** capitalismo, democracia, cambio climático, medio ambiente, movimientos, lugares: Global

❖ La responsabilidad por las opiniones expresadas en los trabajos firmados descansa exclusivamente en su(s) autor(es), y su publicación no representa un respaldo por parte de La Alianza Global Jus Semper a dichas opiniones.



Bajo licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

© 2024. La Alianza Global Jus Semper
Portal en red: https://www.jussemper.org/Inicio/Index_castellano.html
Correo-e: informa@jussemper.org